

# ALCANCES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN BALANCE DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018

Carmen María Ramírez Bustamante<sup>1</sup> y Enrique José Ramírez García<sup>2</sup>

## *Sumario*

I. LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA Y EL DEBATE PÚBLICO; II. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA; III. BALANCE DEL PROCESO ELECTORAL 2018

## INTRODUCCIÓN

Después de un hecho histórico en el que el sentimiento de la necesidad de cambio de una sociedad que pide un acuerdo social diferente, decide dar la oportunidad a un proyecto alternativo de nación, sus expectativas “ponen la vara muy alta” a una clase política acostumbrada a actuar como grupo diferenciado de la sociedad y a entender su carácter de representantes delegados de la misma, sin, paradójicamente, volver a recurrir a la propia sociedad para modelar la política pública.

Consciente o por mera percepción, en este proceso electoral, la sociedad refrenda que el concepto de soberanía popular no se quede solamente en letra muerta de la norma o en el discurso político, sino que tenga una expresión en el hecho cotidiano de hacer país.

Así pues, lo que queremos con este trabajo es reflexionar acerca de las vías para lograr este propósito, derivadas de la propia experiencia en el manejo de la comunicación política durante el proceso electoral en las dimensiones del arreglo institucional, el concepto de la libertad de expresión y sus alcances, y la participación ciudadana.

## I. LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA Y EL DEBATE PÚBLICO

La democracia se conceptualiza dependiendo de la determinación de quienes forman parte del pueblo y lo que requiere una decisión para ser autorizada por éste en su conjunto. En atención a ello, Cohen propone dos concepciones de democracia que se diferencian por sus interpretaciones de la idea fundamental de decisión colectiva: agregativa y deliberativa. Para la primera, las decisiones son colectivas siempre que surjan de elección colectiva

---

<sup>1</sup> Estudiante de tiempo completo de la Maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Correo electrónico: [carbusram@gmail.com](mailto:carbusram@gmail.com).

<sup>2</sup> Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Correo electrónico: [ejrg55@yahoo.com.mx](mailto:ejrg55@yahoo.com.mx).

vinculante que otorguen igual consideración a los intereses de cada persona involucrada en las decisiones. En el segundo caso, de acuerdo con la democracia sustantiva, “una decisión es colectiva si surge de disposiciones de elección colectiva vinculante que establezcan condiciones de razonamiento libre y público entre iguales que son gobernados por las decisiones” (Cohen, 2001: 236).

El razonamiento libre al que hace referencia la democracia deliberativa no se limita a requisitos políticos, pues la democracia en la perspectiva deliberativa, va más allá de ser una forma política: es un marco de disposiciones sociales e institucionales. La intensión es vincular de modo manifiesto, el ejercicio del poder a condiciones de razonamiento público, es decir, crear las condiciones de comunicación bajo las cuales se permita expresar la voluntad y opinión de parte de los ciudadanos de un Estado para que éstas tengan un peso institucionalizado sobre el ejercicio del poder político.

Cohen, en el ensayo citado, trata el tema de “pluralismo razonable” cuya tesis principal apunta al hecho de que existen diferentes e incompatibles filosofías de vida hacia las cuales son atraídas las personas razonables en condiciones favorables para el ejercicio de la razón práctica. En este sentido, la “doctrina abarcativa” de la que habla Rawls –que incluye un catálogo de valores éticos y proporciona una guía de compromiso universal- es superada porque se asume que la verdad trasciende al ejercicio de la razón práctica adecuada para esperarla de otros.

Lo anterior encuentra apoyo en cinco consideraciones. En primer lugar, se observan los desacuerdos entre tradiciones de pensamiento étnico. Otra cuestión es el hecho de que el ejercicio de la razón práctica no genera una tendencia a converger en una filosofía de vida. Asimismo, ninguna teoría convincente del funcionamiento de la razón práctica predice los efectos a partir de la combinación de los diversos tipos de moral abarcativa, después de esgrimir suficientes argumentos. Tampoco hay un mecanismo social o político atractivo que genere consenso. Finalmente, el ejercicio de la razón pública se topa con predisposiciones a diferentes tradiciones cuya preeminencia hace difícil la tarea de eliminar las diferencias.

No obstante las anteriores consideraciones, es importante señalar que la adquisición y acuerdo en las ideas políticas, no surge de un razonamiento práctico, sino por medio del dominio de ideas y principios que son expresados por instituciones comunes y públicas de

diversos tipos como la familia, las Iglesias, asociaciones y el Estado, entre otros. De esa manera, para que la gente que vive bajo las directrices de pensamiento y razonamiento cuyo basamento son aquellos principios e ideas, es más sencillo que desarrollen una adición a ellos generando la cultura política que regirá las decisiones y la organización pública.

En resumen, en una sociedad democrática, los valores políticos se institucionalizan, mientras que los valores morales no pueden aspirar a tal naturaleza: las personas manifiestan y viven dentro de ciertas tradiciones morales, religiosas y filosóficas que no permitirán un acuerdo moral global, a menos que se utilicen los instrumentos coercitivos del Estado, tendiéndose con ello, a pavimentar un sistema totalitario. Los ciudadanos libres e iguales –características que definen a la democracia deliberativa-, esto es, ninguna perspectiva moral o filosófica provee condición definitiva para ejercer el poder político, y cada ciudadano dispone de igual capacidad para participar en una discusión que apunta a autorizar el ejercicio del poder.

La concepción deliberativa de democracia coloca al razonamiento público como el centro de la justificación política. De modo que, en primer lugar, como ya lo mencioné, es necesario que los participantes sean considerados como iguales, lo cual implica que la distribución del poder y de los recursos no incida en sus posibilidades de contribuir a la deliberación. Dicha igualdad permite que cualquier ciudadano tenga potestad de defender, por ejemplo, una política pública dando razones para promoverla, pero es prudente que piense en el bienestar de los demás y se adopte una medida que vaya en ese sentido, pues se requiere que las partes hallen razones aceptables. Cuando éstas son atendidas por la mayoría, entonces quien se opuso al proyecto lo acepta, en virtud del procedimiento democrático deliberativo que dota de legitimidad al resultado.

Cabe señalar que el objetivo de la deliberación no es modificar las preferencias de los ciudadanos reduciendo su diversidad, sino tomar decisiones colectivas; empero, el propio razonamiento público puede lograr disminuir la pluralidad de preferencias en su desarrollo, puesto que las personas piensan que aquella que detentan, no puede ser sostenida por razones adecuadas. Cuando es así el agente reconoce, y eso es suficientemente importante como para incidir en las motivaciones.

Tras estos elementos estructurales de la democracia deliberativa, es preciso abordar su esencia que es, en estricto sentido, la responsabilidad de garantizar las libertades

religiosa, expresiva y moral. Éstas, no tienen una conexión definitiva con el proceso democrático, como sí ocurre con los derechos de asociación, expresión y participación. Tal situación implica que si pretendemos valorar a la democracia en su sustancia y no sólo de manera formalista, la igualdad en la participación no es suficiente; se debe buscar razones políticamente aceptables para todos, principio de Cohen denomina de “inclusión deliberativa”.

Como se podrá constatar, la teoría deliberativa de la democracia define a este régimen político desde una perspectiva normativa, es decir, considerando las condiciones ideales que se deben cumplir para la toma de decisiones políticas y la formación de la opinión pública puedan ser consideradas auténticamente democráticas. El ideal de la democracia deliberativa es la atención del mejor argumento público. Habermas propone su ética del discurso como un conjunto de postulados normativos para lograr que la toma de decisiones políticas y la formación de la opinión pública sean democráticas. Estos postulados consisten, fundamentalmente, en la presencia de las siguientes premisas en los procesos antes mencionados (Steiner *et al*, 2004, 1-42):

- a) Que exista apertura sobre los temas a discutir
- b) Que se proporcionen argumentos (que se ofrezcan razones y no simples preferencias emocionales).
- c) Que los argumentos proporcionados se refieran al bien común de la comunidad política.
- d) Que los deliberantes sean honestos o veraces en los argumentos que proporcionen en la actividad deliberativa.
- e) Que los deliberantes tengan la intención inicial de llegar a un consenso racional, aunque al final tomen la decisión por el principio de mayoría (ya sea relativa, absoluta o calificada).

En contraste, el debate público es más amplio y tiene un ideal menos exigente que la deliberación pública; simplemente implica un compromiso permanente de los actores políticos de reflexionar y discutir, dentro de las instituciones representativas o en la esfera pública sobre las mejores leyes y políticas públicas para el Estado o la comunidad política. En ese sentido, el debate público constituye una aplicación realista del ideal de la democracia deliberativa (Betancourt, 2014:14).

Por medio del debate público, los ciudadanos y las autoridades discuten abiertamente sobre su bien común; sin embargo, el tiempo de duración se vuelve flexible. Es un proceso gradual de comunicación a través de distintos medios, y con amplia libertad. Las condiciones y limitaciones atienden a la madurez democrática de gobernados y gobernantes, sobre todo, del nivel cultural –en sentido amplio- que implique la apertura a recibir información y la capacidad para exigir los derechos básicos.

Como se puede deducir de lo antes mencionado, hay tres tipos de derechos fundamentales que son eje transversal para que el debate político llegue a buen puerto, máxime cuando nos encontramos en la coyuntura del proceso electoral: el derecho a la libre expresión, el de imprenta, y el de acceso a la información. Todos ellos de gran importancia, pero nos centraremos en el derecho a la libre manifestación de ideas a través de cualquier modalidad.

Antes de pasar al análisis concreto sobre los alcances del derecho a la libertad de expresión, es preciso exponer las tesis de Habermas y Nino sobre la relación entre derechos humanos y el proceso democrático.

Nino sostiene que los derechos humanos son un contrapeso del proceso democrático. De este modo, se ubica en la tradición analítica liberal en el que ningún derecho individual debe ser violado bajo ninguna circunstancia, ni siquiera con el consentimiento de la mayoría.

Por el otro lado, Habermas rechaza esta dicotomía entre los derechos humanos y el proceso democrático. Argumenta que la subordinación de la democracia a dichos derechos subjetivos desmerece injustificadamente el principio democrático. Busca el consenso razonado. En todos los asuntos, la veracidad de las aseveraciones resulta de la capacidad para suscitar el asentimiento informado e imparcial de las partes interesadas. El principio democrático es un mecanismo idóneo para que el Estado logre su justificación y su verdad. Imponer desde fuera del proceso, a los derechos humanos, socava la legitimación de las estructuras sociales.

Empero, no debe haber conjeturas precipitadas, en cuanto al reconocimiento que hace Habermas de los derechos humanos, pues es uno de los defensores más acérrimos de éstos dentro del esquema constitucional; sino que piensa que los derechos humanos no

deben entenderse como un contrapeso al proceso democrático, sino como una de sus premisas intrínsecas.

La voluntad mayoritaria tiene peso normativo, así como legitimidad social, si cumple con ciertos requisitos como el respeto a los derechos individuales básicos. En el proceso democrático se obtiene el acatamiento de todos, aun de los disidentes, en virtud del respeto que se muestra a todos. El ciudadano está en igualdad de condiciones con el otro cuando existen los requisitos formales para la institucionalización jurídica de la formación discursiva de opinión y cuando los medios para comunicar las ideas, así como el derecho de réplica ante expresiones negativas hacia las personas, están garantizados por el Estado.

Habermas define una posición en la que la democracia y derechos humanos se encuentran en el mismo plano. Finalmente, el autor busca establecer la conexión interna entre soberanía popular y derechos humanos, la cual se encuentra en el modo de ejercer la autonomía política. Así, la autonomía privada y la pública se presuponen mutuamente, y no hay una jerarquía entre ellas. La pública se ejerce como autonomía política – en el contexto de un proceso democrático discursivo que requiere el respeto a la autonomía privada expresada en los derechos humanos.

Nino propugna que la democracia tiene un valor epistémico –con lo que se acerca a la teoría de Habermas-, pues permite conocer algunas verdades como los derechos *a posteriori*. Sin embargo, para desempeñar la función epistémica, tienen que cumplirse ciertos requisitos; en otras palabras, la democracia tiene que concederles a sus ciudadanos otros derechos: los *a priori*.

Los derechos *a posteriori* de Nino se refieren a los derechos negativos de libertad y los derechos sociales de participación, mientras que los *a priori* corresponden a los derechos políticos de participación. Estos últimos, dice Habermas, son condiciones necesarias, que posibilitan, en primer lugar, el ejercicio de la autonomía política; como condiciones facilitadoras no pueden limitar la soberanía del legislador. Nino afirmaría que los derechos *a priori* son los que permiten al proceso democrático desempeñar su función epistémica y que, por ende, no limitan, sino que posibilitan la democracia (Oquendo, 2004: 29).

La libertad de expresión es el núcleo del debate público, pues permite que las personas manifiesten sus ideas, proyectos e inquietudes entre sus iguales y con las autoridades. En el siguiente apartado se verá su naturaleza y alcances.

## II. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA

Como punto de inicio, podemos afirmar que el debate público de calidad tiene consecuencias positivas en los ciudadanos, pues permite conocer más fácilmente las cuestiones públicas. Asimismo, potencialmente, mejora la capacidad de análisis de sus ciudadanos sobre las cuestiones públicas y de enriquecer su competencia intelectual para tomar decisiones asertivas en pro de la comunidad.

Es oportuno mencionar que para que el discurso sea racional, los ciudadanos requieren desarrollar un hábito que perfeccione, gradualmente, su inteligencia práctica, pues el ser humano no tiene la capacidad de discernir intuitivamente lo que conviene al bien de su comunidad política. Es el debate público, el camino propicio para lograrlo, pero no se debe perder de vista un punto nodal: el Estado debe contemplar un entramado institucional que lo garantice y fomente, aun imponiendo restricciones mínimas, así como no intervenir de forma desproporcionada en el goce y ejercicio de la libertad de expresión y de acceso a la información.

En ese sentido las elecciones de autoridades representativas en las democracias liberales necesitan normativamente de una opinión pública informada y reflexiva para reforzar el carácter democrático, pues en caso contrario, al no haber una convicción firme, se puede manipular a las personas con mayor facilidad.

La noción de opinión pública se constituyó como relevante para las democracias desde que la prensa escrita fue el primer medio de comunicación masiva, ya que gracias a los periódicos muchos ciudadanos comenzaron a discutir las cuestiones públicas en espacios abiertos, con esto se separa la esfera pública de la esfera de los asuntos privados.

Desde que surgió la idea del espacio público gracias a los medios de comunicación masiva, aparte de la realización de elecciones libres y competidas, la opinión pública, debidamente informada y razonada, se consideró necesaria para que se pudiera afirmar que un pueblo realmente elige a sus autoridades políticas representativas. A partir de esta idea

se puede afirmar que los programas transmitidos durante los procesos electorales acrecientan la legitimidad democrática.

Ahora bien, debemos subrayar que la democracia exige el escrutinio de la población sobre los actos de los gobernantes, y la comprensión plena de los planteamientos de propuesta de los que aspiran a ocupar un cargo público. De ahí que la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información sean piedras angulares para la existencia misma de una sociedad democrática, así como la viabilidad del Estado.

El acceso a la información es la herramienta principal para la participación ciudadana, pues permite conocer el actuar del Estado, al estar regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.

Lo anterior nos conduce a advertir que una democracia no se legitima mediante procesos electorales confiables, sino con el refrendo de dicha confianza de los gobernados en sus instituciones públicas, lo cual únicamente es posible por medio de la transparencia y rendición de cuentas de éstas (Peschard, 2013:148).

Respecto a la libertad de expresión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios jurisprudenciales, en los cuales reconoce que la libertad de expresión se puede entender en tres dimensiones dentro de un sistema democrático:

- a) Constituye uno de los derechos individuales que refleja la virtud de los seres humanos de pensar y concebir al mundo desde nuestra propia perspectiva y de comunicación.
- b) La importancia de la libertad de expresión deriva de su relación estructural con la democracia. En el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos se establece que coadyuva a fortalecer el funcionamiento de sistemas democráticos, pluralistas y deliberativos mediante la protección y el fomento de la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole.
- c) También es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Se trata de un mecanismo esencial para el ejercicio de los derechos a



la participación, la libertad religiosa, la educación, la identidad étnica o cultural y la igualdad.

A partir de estas tres dimensiones del derecho a la libertad de expresión, la segunda es la que nos interesa para este estudio, pues visto con su interrelación con la democracia, se puede definir como el derecho del individuo y de toda la comunidad a participar en los debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad (CIDH, 2004).

De esta definición se entiende que las expresiones, informaciones y opiniones atinentes a asuntos de interés público, al Estado y sus instituciones, gozan de mayor protección bajo la Convención Americana. En otras palabras, el Estado debe abstenerse de establecer limitaciones a menos de que a) haber sido definidas en forma precisa –como la imparcialidad que deben guardar los servidores públicos durante las contiendas electorales–; b) estar orientados al logro de objetivos imperiosos autorizados por el marco jurídico nacional e internacional de la materia; c) no signifiquen censura previa y pueden ser establecidas mediante responsabilidades posteriores y proporcionales; d) no sean discriminatorias, y e) no se puedan imponer a través de medios indirectos.

Así, dentro de los debates especialmente protegidos quedan comprendidos aquellos que puedan ser críticos para los servidores públicos, los candidatos a ocupar cargos públicos o las personas vinculadas a la formación de la política pública, en virtud de que estas personas tienen un umbral de protección a la privacidad mínima que les expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter público de las actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente a través de su poder de convocatoria pública.

Bajo estas premisas normativas internacionales, se analizan los modelos de comunicación política de 2007-2008, y el de la reforma de 2014.

### *2.1. Modelo de comunicación en materia política y electoral de 2007-2008*

El modelo de comunicación que operó durante la elección de 2006 se fundamentó en la permisión de compra de espacios publicitarios por parte de los partidos políticos, cuyas implicaciones fueron, primero, depender de las televisoras para dar visibilidad a las campañas, es decir, la pérdida de fuerza de negociación con las ellas para proyectar a los

candidatos; una cobertura noticiosa desequilibrada e inequitativa; pocas opciones para escoger espacios en el espectro radioeléctrico, en suma, poner el futuro político en el duopolio televisivo y en el oligopolio radiofónico.

Además de esto, en la llamada “guerra sucia” contra uno de los candidatos, intervinieron grupos empresariales que compraban tiempo en radio y televisión, es decir, influyeron los factores fácticos sobre la clase política. Del mismo modo, la propaganda gubernamental de los funcionarios afectó la equidad de la contienda y su percepción ciudadana.

A raíz de esta problemática, se decidió reformar el modelo de comunicación política. Dentro de las modificaciones quedaron las siguientes prohibiciones en el artículo 41 y 134 (datos extraídos de Gilas, 2016:16-40).

*Cuadro 1. Modelo de Comunicación Política 2007-2008*

Ninguna persona física o moral puede contratar propaganda electoral	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los partidos sólo podrán acceder a radio y televisión a través de los tiempos de Estado que administraba el Instituto Federal Electoral</li> <li>- Se creó el procedimiento especial sancionador para castigar las violaciones a las reglas sobre acceso a los medios de comunicación, y la suspensión de contenidos ilegales.</li> </ul>
No se pueden realizar expresiones que calumnien a las personas o denigren a las instituciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Existe un sistema dual de protección, según el cual, los límites son más amplios cuando se refieren a personas públicas, por lo que la imposición de sanciones civiles sólo se puede en aquellos casos en que exista información falsa o que sea producida con real malicia</li> <li>- Las expresiones que están excluidas de protección constitucional son aquellas absolutamente vejatorias cuando se refieran a una colectividad, sean ofensivas, e</li> </ul>

	<p>impertinentes para expresar opiniones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Está estrictamente prohibidas las expresiones que impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o denigren a los ciudadanos</li> <li>* Prohibición de símbolos religiosos en la propaganda política.</li> </ul>
Durante las campañas electorales no se puede transmitir la propaganda gubernamental	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ningún funcionario público puede promover su imagen, las acciones hechas durante su gobierno, o al candidato de su partido.</li> </ul>

## 2.2. Modelo de la reforma 2014

La máxima dimensión del derecho a la información y a la libre expresión en el ámbito del debate público se inserta en el concierto de la convencionalidad que trazó el poder reformador del 10 de junio de 2011 que favoreció a los derechos humanos, instaurando como principio de interpretación el principio *pro persona*.

Asimismo, se erigió la obligación –establecida en el artículo primero constitucional– de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezcan la ley.

En ese contexto, la reforma prohibió sólo las expresiones que calumnien y difamen a las personas, y eliminó como limitaciones, las expresiones que tengan por objeto la denigración a las instituciones y/o partidos políticos. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo por medio de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.

Adicional a estas prohibiciones, se establecieron nuevas reglas que consisten en (Gilas, 2016:40-46).

- a) Equidad en la aparición pública de los candidatos en los medios de comunicación

- b) Los medios de comunicación deben distinguir cuando la información es noticiosa y cuando es de promoción política
- c) En los debates se debe procurar el diálogo abierto entre los candidatos.
- d) Se debe garantizar el derecho de réplica
- e) Los medios de comunicación deben respetar la vida privada de los candidatos, salvo que tenga implicaciones en el ámbito público.

### III. BALANCE DEL PROCESO ELECTORAL 2018

En el proceso electoral 2017-2018, quizá como nunca, en la propaganda política se utilizaron las redes sociales y demás mecanismos de comunicación derivados de las nuevas tecnologías, además de los medios tradicionales de difusión, como periódicos, revistas, radio y televisión abierta, en lo que la violencia verbal y en pocos casos conceptual destacó en los dichos de los actores políticos, a provechando que sobre todo que las redes sociales no son afectas a la regulación del marco normativo electoral.

Si vemos que la emergencia exponencial de la Internet devino en un déficit de la confianza inducido hacia diversos actores de la contienda.

Sin duda, a diferencia de las últimas contiendas electorales, la comunicación digital a través de sus diversos medios, determinaron las preferencias electorales. Esto, en virtud, de “ejércitos de bots”, de expertos en inducir una idea reiterada usando los algoritmos de Twitter y Facebook, y la comunicación social y política del gobierno, para manipular la percepción ciudadana. Sin embargo, los estrategas del área de comunicación del Movimiento de Regeneración Nacional, supieron detectar la debilidad de las propuestas y la forma de darlas a conocer. Como respuesta a esta situación, elaboraron documentos cortos, infografías y demás recursos para explicar las propuestas más importantes del candidato presidencial, en lugar de enfocarse en denostar a sus opositores.

La experiencia del proceso electoral que finalizó, deja al descubierto que una reglamentación sumamente elaborada que mezcla la dogmática conceptual con la reglamentación hasta su más mínima expresión, no permite que los actores políticos tengan la flexibilidad necesaria para hacer llegar a la sociedad un mensaje claro, congruente, viable, sostenible con propuestas realizables, a una sociedad que en términos generales, recibe grandes impactos de propaganda vía spots de 30 segundos que, por ejemplo,

conforme al modelo de comunicación basado en asignación de tiempos representaron cerca de 60 millones de mensajes en poco más de 6 meses<sup>3</sup>.

Si además consideramos que el proceso se dividió formalmente en precampaña, intercampaña, y campaña, con una reglamentación puntual para cada una de ellas en, nuestra opinión hace que el mensaje no tenga una continuidad de congruencia expositiva hacia la sociedad, y para todos los efectos el actor político en precampaña tenga que simular que no está haciendo campaña.

Lo anterior origina que se jurisdiccionalicen los criterios para el pautado de el mensaje político, y sea en la campaña federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien vaya definiendo casuísticamente, y en muchos casos a posteriori qué es legalmente correcto y qué no lo es.

Dentro de este panorama, ¿cómo participa la gran masa de la sociedad, que permanece cautiva a un mensaje político que muchas veces no pasa de ser propagandístico, y no tiene otra opción que permanecer estática en la contienda en que debería ser la parte protagónica, toda vez que al final de cuentas está definiendo a quién elige como sus representantes?

Ante este cuestionamiento, ¿entonces qué hacer diferente? ¿Modificar por enésima ocasión la legislación electoral para adecuarla a la experiencia de la última elección, o a las necesidades de determinada fuerza política?; pensamos que no, sino crear un modelo de comunicación que coadyuve al establecimiento del Estado democrático que aspiramos ser.

La contundente victoria de una fuerza política que en términos de su registro como partido político no deja de ser emergente, ya que su aparición como partido político no data más de cuatro años, que inclusive para los más optimistas no deja de ser sorprendente, creó un ambiente de alta expectativa de cambio, que requiere un paradigma diferente de cómo conceptualizar y hacer la *res pública*, con un arreglo institucional que de origen a un cambio de régimen que consolide la democracia mexicana a través de la creación y operación de canales amplios de debate, libertad de expresión y respeto a los derechos humanos a la población en su conjunto, y que la participación política de la sociedad en las definiciones del rumbo del país sea un continuo y no solamente de estacionalidad electoral.

---

<sup>3</sup> Datos del Instituto Nacional Electoral

## BIBLIOGRAFIA

- BETANCOURT HIGAREDA, FELIPE CARLOS. 2014. La importancia del debate público para la democracia. México: IEEM.
- COHEN, JOSHUA. 2001. “Democracia y libertad”, en ELSTER, JON. La democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa.
- GILAS, KAROLINA MONIKA. 2016. Sistema de comunicación política a partir de la reforma de 2014. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- OQUENDO, ÁNGEL R. Democracia y pluralismo. México: Fontamara
- PESCHARD, JACQUELINE. 2013. “Libertad de Expresión y acceso a la información: componentes fundamentales de un sistema democrático”, en GONZÁLEZ PÉREZ, LUIS RAÚL Y VILLANUEVA, ERNESTO. Libertad de expresión y responsabilidad social. Estudios en homenaje al doctor Jorge Carpizo. México: UNAM- Oxford
- STEINER, JÜRIG *et al.* 2004. Deliberative politics in action. Analyzing parliamentary discourse. Cambridge: Cambridge University Press.